

AVANCE EDITORIAL

Los periodistas del equipo de investigación de "La Vanguardia" Eduardo Martín de Pozuelo y Santiago Tarín recuperan en "España acusa" (Plaza & Janés) la historia de cientos de españoles asesinados, desaparecidos y torturados durante las dictaduras de Argentina y Chile. En este libro, que aparecerá la próxima semana, los autores han re-



cogido cientos de testimonios y han reunido los documentos más trascendentes. A continuación se ofrecen extractos del capítulo "Víctimas de un doble naufragio", en el que se analiza el papel de las autoridades españolas ante la represión que sufrieron algunos descendientes de quienes un día dejaron España para buscar una nueva patria.

Víctimas de un doble naufragio

Los españoles que buscaron el cielo en Chile y Argentina y hallaron el infierno

Había hijos de españoles en los gobiernos de Allende; en España buscó refugio Perón y descendientes de hispanos formaron parte de los ejércitos que tomaron el poder por la fuerza en Argentina y Chile durante la década de los setenta. Y también hay muchos compatriotas en las listas de asesinados, desaparecidos y torturados durante la represión de los regímenes militares. Casi 700 víctimas españolas figuran en los sumarios que instruye en España el juez Baltasar Garzón.

En las biografías de estos hombres y mujeres que sufrieron el hostigamiento de los militares se encuentran todos los motivos para emigrar: políticos, económicos, casuales... Todos quisieron buscar una nueva tierra de promisión y desgraciadamente compartieron la suerte del naufrago por partida doble: primero, cuando abandonaron su terruño; después, cuando los dirigentes de sus nuevas patrias no solamente no los admitieron, sino que los victimaron. Y si ellos vivieron el desamparo de la doble zozobra, también quedaron a la deriva los que les sobrevivieron, aquellos familiares que quedaron vivos y que desde entonces buscan un lenitivo que les permita curar su honda herida: el profundo dolor causado por ser no sólo naufragos, sino huérfanos de sus seres queridos que desaparecieron envueltos en la vorágine de la violencia política.

Cuando se desencadenó la represión en Argentina y Chile, y los ciudadanos se vieron no solamente abandonados por las autoridades de su país, sino además perseguidos, aquellos españoles o sus familias volvieron la vista hacia su tierra natal y hacia sus representantes. A ellos les pidieron cobijo, apoyo y protección. Y el primer lugar adonde acudieron fue a las embajadas y los consulados de España. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo reaccionaron los diplomáticos españoles ante esta eventualidad? Nabor García, que trabajó en la legación española en Santiago, nos contestó sinceramente: "Hicimos lo que pudimos". José Luis Dicenta, quien ocupó el consulado en Buenos Aires, aún recuerda con tristeza que de doscientos casos que planteó ante las autoridades argentinas, sólo pudo solucionar uno.

La relación entre la administración española y sus súbditos es todavía objeto de discusión. Aunque John Fitzgerald Kennedy dijera aquello de "No preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros. Preguntad qué podéis hacer vosotros por vuestro país", también hay ocasiones en las que plantearse la relación a la inversa, y es cuando las cosas van mal dadas. Y de los testimonios recogidos se infiere que quizá la respuesta no fue tan contundente como hubieran deseado aquellos que buscaron el amparo de la lejana España, pero sería injusto afirmar que fue negligente o inexistente.

Entre las víctimas hay opiniones para todos los gustos, pero, al margen de casos puntuales, la valoración sobre los diplomáticos españoles a quienes tocó vivir aquellos tiempos no es mala. Especialmente positivo es el juicio que merecen los representantes del Estado en Chile, precisamente los primeros que abordaron la cuestión de los desaparecidos. Entre ellos estaba Nabor García, quien llegó a Santiago en febrero de 1974 para hacerse cargo de la secretaría de la embajada, cargo en el que permaneció hasta 1978. Posteriormente regresó al país andino como embajador, coincidiendo con el tiempo en que se desarrollaba el proceso por el asesinato del funcionario español de la ONU Carmelo Soria. Él estuvo presente en todas las sesiones, a fin de hacer patente a los jueces que



Un soldado custodia prisioneros en el Estadio Nacional de Chile días después del golpe

Casi 700 víctimas españolas figuran en los sumarios que instruye el juez Garzón sobre los asesinados, desaparecidos y torturados durante aquellos regímenes militares

José Luis Dicenta, cónsul en Buenos Aires, aún recuerda con tristeza que de doscientos casos que planteó ante las autoridades argentinas sólo pudo solucionar uno

El Rey era el primer jefe de un Estado democrático que pisaba Argentina tras el golpe de 1976 y la prensa internacional vigilaba con lupa cómo se desenvolvía el monarca

ellos no olvidaban ni el crimen ni a los criminales. En enero de 1999, Nabor García era cónsul general de España en Ciudad del Cabo, desde donde nos contó en una conversación telefónica sus experiencias de aquellos años. "Hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano, en la medida de lo posible. Si se da cuenta de la época que era también en España (Franco aún vivía) entenderá los problemas que teníamos. Cuando hubo la estampida, la gente no corrió a la embajada de España porque era un sitio por lo menos dudoso, y hay que decir que el embajador Enrique Pérez-Hernández fue inmensamente valiente y decidido, porque ayudó a todos los españoles y chilenos que pudo". Esta situación política de España era también tenida en cuenta por los mandos del régimen militar chileno, quienes daban por supuesto que los diplomáticos españoles estaban de acuerdo con sus métodos y fines (...)

La pericia de personas como Pérez-Hernández o Nabor García contribuyeron a salvar vidas en el Chile de Pinochet. Años después, en la Argentina de las Juntas militares, similar tarea recayó en otros compañeros de la carrera diplomática, aunque Videla y compañía, discípulos aventajados de Pinochet, habían tapado todos los resquicios para poder desempeñar su tarea represiva con la mayor impunidad.

"Ni ha desaparecido ni sabemos que haya

nada contra este señor o señora." Ésta era la respuesta de las autoridades argentinas cuando los diplomáticos españoles se interesaban por el caso de algún compatriota que había sido secuestrado. Ésta era la contestación que, una y otra vez, recibía el cónsul adjunto de España en Buenos Aires, José Luis Dicenta (...)

"Sabíamos perfectamente que todas esas desapariciones eran producto de un plan previamente preconcebido y muy articulado desde el poder. De esa forma se produjeron 30.000 desapariciones y entonces ya nos olíamos que previamente eran torturados, que sufrían toda clase de vilipendios, que no había ningún respeto por la dignidad." (...)

José Luis Dicenta recuerda con tristeza que él mismo intervino en unos doscientos casos durante los cinco años que permaneció en Argentina. Y de esos doscientos, tan sólo pudo localizar a una mujer, María Consuelo Castaños: "Esa chica era profesora. Vivía en un suburbio de Buenos Aires. La fueron a buscar y se la llevaron. Le taparon la cara como siempre y la trasladaron a un lugar un par de veces y dio por supuesto que habrían asesinado a su marido y a sus hijos. Después de varios traslados, no sé cómo, consiguió hacerle llegar a su madre un papel que decía que estaba en una comisaría, la de Lanusse. La madre fue quien me vino a ver".

Yo fui en el coche del consulado a esa comisaría y aunque al principio me negaron que estuviera allí, a fuerza de insistir conseguí que hicieran una serie de llamadas y que me la dejaran ver. Pude entrevistarme con ella en un patio pequeño de la comisaría, sentados en un banco con la espalda pegada en la pared y rodeados de soldados armados. Esta mujer, de forma inteligente, se aseguró salir con vida de aquel encierro porque en lugar de hablar en voz baja o de contarme medios secretos, lo hizo gritando, para que lo oyeran todos, y me detalló todas las torturas a las que la habían sometido. Cuando terminó la entrevista se la llevaron. Nosotros hicimos inmediatamente una nota aclarando que la ciudadana española María Consuelo Castaños había sido localizada en tal comisaría y que agradeceríamos que nos comunicaran su situación legal. Ahí nos informaron que había sido llevada a la cárcel de Villa Devoto y luego la expulsaron. Cuando la vi le comenté que me tuvo muy preocupado, y ella me explicó que, al saber que yo estaba allí, pensó que la forma de sobrevivir era contar en voz alta todo lo que había hecho, para que ellos se dieran cuenta de que el consulado o la embajada lo sabía." (...)

Dicenta pasó cincuenta años en Argentina, durante los cuales murió en España Francisco Franco, llegó a la democracia y asumió la jefatura del estado el rey Juan Carlos I. El nuevo monarca visitó pronto Argentina. Fue un noviembre de 1978 y el asunto de los desaparecidos no quedó en el olvido. (...)

Don Juan Carlos y doña Sofía llegaron a Buenos Aires el domingo 26 de noviembre de 1978, procedentes México y Perú. El suyo fue un viaje cargado de incertidumbres. Era el primer jefe de un Estado democrático que pisaba la Argentina de las Juntas, puesto que solamente Augusto Pinochet y Hugo Bánzer habían visitado la patria de Martín Fierro tras el golpe de 1976. La prensa internacional vigilaba con lupa cómo se desenvolvía el monarca y qué actitud tomaba el joven rey respecto a los dictadores de América Latina. De hecho, después se conoció que los fotógrafos estadounidenses esperaban que don Juan Carlos abrazara a Videla para difundir la instantánea, pero fue una foto que no se realizó jamás, porque nunca se dio esta circunstancia.